

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por JUSTINA PEDROZO PAYARES en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES-, con vinculación por pasiva de LEONARDO FABIO y JEAN CARLO ARENAS PEDROZO, y ANDERLEY ARENAS MOSQUERA (Pág. 94 Archivo 01) (Radicado 05001-31-05-007-2019-00480-01).

ANTECEDENTES

Pretende la demandante el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su cónyuge HUMBERTO ARENAS HERNÁNDEZ, junto con los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso.

Al efecto narró que inició convivencia con Humberto Arenas el 06 de agosto de 1989, para luego contraer matrimonio civil el 27 de enero de 1999, compartiendo techo, lecho y mesa hasta el 12 de febrero de 2012. Que de esa unión procrearon 3 hijos: Diego Humberto, Jean Carlo y Leonardo Fabio Arenas Pedrozo, todos mayores de edad, pero el último en condición de discapacidad. El 18 de diciembre de 2016 falleció

Humberto Arenas, hecho a partir del cual el 01 de febrero de 2017 en nombre propio y de sus hijos radicó solicitud para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, previa radicación efectuada para el mismo fin por el menor Anderley Arenas Mosquera el 16 de enero de 2017 como hijo del causante. Por medio de la Resolución SUB 36609 del 21 de abril de 2017 Colpensiones reconoce la causación de la prestación en cuantía de un SMLMV pero niega su derecho por no acreditar el requisito de convivencia, y deja en suspenso el de sus hijos hasta tanto se arrime documental de escolaridad e interdicción, reconociendo en favor de Anderley Arenas el 33.33% de la prestación. El 21 de septiembre de 2018 solicita un nuevo estudio, petición que es resuelta negativamente por Resolución SUB 267829 del 11 de octubre de 2018. Ya por acto administrativo SUB 118553 del 15 de mayo de 2019 se da ingreso a nómina de Leonardo Fabio Arenas a partir del 18 de diciembre de 2016.

Por auto del 23 de julio de 2019 el Juzgado admitió la demanda, y en igual oportunidad vinculó como litisconsortes por pasiva a Anderley Arenas Mosquera, Jean Carlo Arenas Pedrozo y Leonardo Fabio Arenas Pedrozo (Pág. 94-95 Archivo 01).

COLPENSIONES dio respuesta oportuna al líbello con oposición a lo pretendido, por aducir que en el asunto no se acreditan las condiciones del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, específicamente una convivencia por un tiempo de 5 años anteriores al fallecimiento. Como excepciones de mérito formuló las de inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, improcedencia de la obligación de pagar intereses moratorios, buena fe, prescripción y/o caducidad de la acción e imposibilidad de condena en costas.

LEONARDO FABIO ARENAS PEDROZO y ANDERLEY ARENAS MOSQUERA, quienes intervinieron por intermedio de curador *ad litem*, arrimaron escrito de respuesta, con oposición a lo pedido en la demanda por ausencia del requisito de convivencia. Propusieron las excepciones de fondo de improcedencia de las pretensiones y prescripción.

Por auto del 14 de diciembre de 2020 la demanda se dio por no contestada de parte de Jean Carlo Arenas Pedrozo (Archivo 02)

Surtido el trámite de rigor, el 24 de mayo de 2023 el Juzgado de Conocimiento que lo es el Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, profirió sentencia en la que DECLARÓ que a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes que se causó con ocasión del fallecimiento de su cónyuge en un 50%, dejando el porcentaje restante dividido entre Anderley Arenas Mosquera y Leonardo Fabio Arenas. CONDENÓ a Colpensiones a pagar la suma de \$41.054.003 por el retroactivo liquidado entre el 18 de diciembre de 2016 y hasta el 31 de mayo de 2023, valor que se ordenó indexar al momento del pago, con autorización previa para los descuentos con destino al sistema de salud. CONDENÓ a Colpensiones a seguir reconociendo a la demandante a partir del 01 de junio de 2023 la suma de \$580.000 correspondientes al 50% de la mesada. AUTORIZÓ a Colpensiones realizar la compensación para asumir el pago del retroactivo de la demandante, descontando de las mesadas futuras de los beneficiarios hijos hasta el 50% para completarlo. CONDENÓ en costas a Colpensiones, fijando las agencias en derecho en la suma equivalente a 1 SMLMV.

La activa se apartó de la decisión en lo que tiene que ver con la negativa de los intereses moratorios deprecados, señalando que con ellos se busca sancionar la conducta pasiva y negligente de la entidad obligada a responder por la prestación de carácter económico, siendo la manera en la que el legislador garantiza que los reconocimientos prestacionales se den de manera oportuna. Aduce que en el caso Colpensiones niega la pensión por ausencia del requisito de convivencia, pero como jurisprudencialmente se ha dado resolución a los casos, debe la entidad someterse no solo a la Ley sino también a esta fuente de derecho cuando se trata de posturas que han sido reiteradas bajo un punto de derecho, debiendo en ese orden dar reconocimiento a estos intereses (Min 41:49 Archivo 19).

La Sala en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conoce del asunto también por el grado de consulta en favor de Colpensiones, por virtud de serle la providencia desfavorable y no acudir a la vía de la apelación.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario que Justina Pedrozo Payares y Humberto Arenas Hernández contrajeron matrimonio civil el 27 de enero de 1999 (Pág. 21-22 Archivo 01), último que falleció el 18 de diciembre de 2016 (Pág. 23 Archivo 01) estando afiliado a Colpensiones. Acudió la demandante en sede administrativa a reclamar la pensión de sobrevivientes en nombre propio y de sus hijos, siendo negada la prestación en su condición de cónyuge por no acreditar una convivencia de 5 años anteriores al fallecimiento, prestación que finalmente se concedió a Leonardo Fabio Arenas Pedrozo y Anderley Arenas Mosquera en su calidad de hijo inválido y menor de edad respectivamente (Págs. 40-50 Archivo 01 y 74-82 Archivo 01) con fecha de efectividad del 18 de diciembre de 2016 cuando ocurrió la muerte (Pág. 23 Archivo 01) en un 33.33% para cada uno sobre una mesada equivalente al SMLMV.

Acorde con lo anterior y en virtud al grado de consulta, el problema jurídico en esta instancia se circunscribe a establecer si Justina Pedrozo Payares acredita en debida forma el requisito de convivencia, necesario para ser beneficiaria en su calidad de cónyuge de la pensión de sobrevivientes con causa de la muerte del afiliado Humberto Arenas Hernández ocurrida el 18 de diciembre de 2016. De ser ello así, habrán de definirse los términos de la concesión, la procedencia de los intereses moratorios o la indexación y la asignación de las costas procesales.

Pues bien, para resolver se tiene que la normatividad aplicable es la vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada, por lo que al haber ocurrido el óbito del afiliado el 18 de diciembre de 2016 (Pág. 23 Archivo 01), debe aplicarse lo que dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003 para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, que en su literal a) señala como beneficiarios de la prestación:

“en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”.

... Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;”

Así, para quien pretenda ser beneficiaria de una pensión de sobrevivientes debe demostrar de manera cierta y convincente la convivencia por un espacio de cinco años con la causante, independientemente de que sea un afiliado o un pensionado, en concordancia con lo definido por la SU 149 de 2021, que se opuso a la postura jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- que determinó como verdadero alcance del literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003 a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, *in dubio pro operario*, que el tiempo de convivencia mínima de cinco (5) años, solo es exigible en caso de muerte del pensionado (Ver SL1730-2020 reiterada en SL3843-2020, SL3785-2020, SL4606-2020, SL489-2021, SL362-2021, SL1905-2021, SL2222-2021 y SL5270-2021), con el argumento de violar tal decisión directamente los principios de igualdad y sostenibilidad financiera del sistema pensional sin

justificación objetiva, y no armonizar con los propósitos de la pensión de sobrevivientes ni con los del requisito de convivencia.

Adicionalmente, dadas las circunstancias específicas del caso la H. Corte Suprema de Justicia también en su interpretación literal de la norma, le dio una especial relevancia al concepto de unión conyugal y en ese sentido, privilegió el derecho del cónyuge a recibir la pensión de sobrevivientes, aun cuando estuviera separado de hecho del fallecido durante sus últimos años de vida, siempre y cuando acredite una convivencia real y efectiva durante el lapso de cinco años, pero no necesariamente anteriores al deceso, sino en cualquier tiempo, puesto que de esta manera se da alcance a la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social.

Ello naturalmente, en voces de la Corporación presupone que no hay vida en común de la pareja de casados al momento de la muerte vínculo afectivo, comunicación solidaria y ayuda mutua que permita considerar que los lazos familiares siguieron vigentes, señalándose por la Corporación en sentencias como la SL1869-2020, SL2015-2021, SL5260-2021, SL2318-2022, SL3651-2022, SL2231-2023 y SL 059-2024 la exigencia de una relación de familia actuante pese al rompimiento de la vida en común no está en armonía con la ley, de acuerdo al actual criterio, toda vez que si bien es cierto, la jurisprudencia exige al cónyuge separado de cuerpos o de hecho convivencia de por lo menos cinco años en cualquier tiempo, también lo es, que en estos eventos no se exige que el potencial beneficiario de la prestación de sobrevivientes demuestre que mantuvo un vínculo de solidaridad y acompañamiento espiritual o económico hasta el momento de la muerte, pues ello no se acompasa con la realidad social que conlleva a las separaciones de hecho de una pareja, y ello se configura en un requisito adicional que no establece el inciso 3.º del literal b) artículo 13 Ley 797 de 2003, ya que en el texto de la aludida disposición se hace referencia es a que, en ese caso, la consorte tiene derecho a una cuota parte de la

pensión de sobrevivientes, proporcional al tiempo convivido con el afiliado fallecido, contenido e interpretación que encuadra con la situación social que regula dicho precepto.

Se clarificó igualmente por la Corte desde la sentencia con radicado 41637 del 24 de enero de 2012 que tal postura se predica también, para cuando no existe compañera o compañero permanente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado bajo criterios de equidad y justicia, en la medida que no sería proporcional privar a la (el) esposa (o) del reconocimiento de la pensión, en el evento de no concurrir aquel supuesto (Ver SL3973-2020), cuyo alcance es la protección de quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social.

En tal contexto, debe brotar del acervo probatorio que existió con el fallecido una convivencia ininterrumpida de por lo menos cinco (5) años anteriores a la muerte o en cualquier tiempo, encontrándose debidamente acreditada la calidad de cónyuge de la actora por medio del registro civil de matrimonios que da cuenta de su celebración dado el 27 de enero de 1999 (Pág. 21-22 Archivo 01).

Para tal efecto, fue recepcionada la prueba testimonial compuesta por DIÓGENES PEDROZO PAYARES - hermano de la demandante-, JUAN DE JESÚS MONTESINO - Yerno de la demandante - y BERTHA LILIANA ARDILA TORRES - Amiga de la demandante-. El primero, como el deponente más contundente y conocedor de las circunstancias en que se desarrolló el vínculo entre la accionante y el fallecido, informó que conoció a Humberto por intermedio de su hermana cuando en 1989 iniciaron una relación, anualidad que recuerda porque al año siguiente nació Diego Humberto su sobrino, misma época del nacimiento de su hija, iniciando desde esa misma época la convivencia que se consolidó con el matrimonio 10 años después. Indicó que el inicio de esa relación se dio en la casa de sus padres, luego en una pieza y finalmente en un lote que construyeron en Barrancabermeja, hasta que finalmente en el

año 2012 se separaron, aduciendo que siempre existió violencia intrafamiliar, donde ella huía pero siempre volvía porque Humberto la conquistaba, separaciones que nunca fueron de meses. Detalla que en ese 2012 llegó donde él con sus 4 hijos -Diego, Leonardo, Jean Carlo y Deiner- donde permaneció por 1 año para luego irse a vivir donde una amiga en Copacabana - Antioquia. Señaló que aun con los problemas que existieron en la pareja, calificándolo como un “*amor raro*”, Humberto siempre fue muy responsable y asumió el sostenimiento de Justina y de sus hijos incluso, luego de la separación que se detonó por ser amenazada con un machete, relatando que era un hombre agresivo que “*metía marihuana*” y además mujeriego, el que murió de un cáncer estando en Barranca cuando ella ya vivía en Medellín. El señor Montesino pudo dar cuenta que para el año 2009 la pareja convivía como tal en Barranca junto con sus hijos, señalando que aproximadamente para el año 2011 Justina se fue para Bucaramanga donde su hermano Diógenes por razones que en fondo desconoce, donde residió 1 año, para luego irse a residir a la ciudad de Medellín. Y la señora Ardila no conoció a Humberto Arenas, pero si a la convocante, cuando llegó entre 2011 y 2012 junto con 4 hijos donde su hermano Diógenes dolida por las acciones de Humberto, donde estuvo por un año y luego se fue para Medellín, advirtiéndole que supo que Humberto los visitaba y se encargaba de su sostenimiento, pero que es una situación que no le constó directamente pues nunca lo vio.

Las anteriores declaraciones, pese a no ser todas conocedoras plenamente de la relación suscitada entre los señores Arenas y Pedrozo, ni las circunstancias de su desarrollo, es convincente para esta Sala de Decisión, tomando fuerza el dicho del señor Diógenes Pedrozo, el que resultó ser absolutamente transparente e imparcial y denota en coherencia con los restantes dichos que entre Justina Pedrozo y Humberto Arenas surgió una relación de convivencia desde 1989 que tuvo múltiples interrupciones por razones de violencia dentro del hogar que provocaban el abandono de la consorte aunque por corto tiempo, por ultrajes y agresiones físicas y verbales, cuyo final se presentó entre los años 2011 y 2012, sin que pueda advertirse un retorno al espacio en

familia, encontrando que al momento de la muerte que acaeció en diciembre de 2016 ya no existía una comunidad de vida, pero si permaneció la unión por más de dos décadas sin probanza de disolución del vínculo que nació desde el 27 de enero de 1999 con la celebración del matrimonio.

Es de trascendencia precisar que aun cuando esas intermisiones en esa convivencia no pueden establecerse temporalmente, no se muestra que la reduzca a menos de los cinco años que exige la jurisprudencia a partir de la intelección normativa; y de cualquier modo, conforme al contexto que rodeó la situación familiar de la convocante y el causante, la H. Corte Suprema de Justicia ha precisado que cuando la cónyuge o la compañera permanente es víctima de violencia intrafamiliar, no puede obligarse el cumplimiento del requisito de convivencia, dado que el instinto de conservación de la integridad conduce a alejarse, y en ese orden, *“en escenarios de este tipo, no se puede culpar al consorte víctima de renunciar a la cohabitación y castigarlo con la pérdida del derecho a la pensión de sobrevivientes pues, además de que la separación es un ejercicio legítimo de conservación y protección al derecho fundamental a la vida y la integridad personal, el legislador no lo puede obligar a lo imposible o establecerle cargas irrazonables”* (Ver SL2020-2019 reiterada en la SL 2247-2023).

Esta tesis, resulta entonces plenamente aplicable pues pensar diferente sería una forma de revictimización contraria a los valores más esenciales del ordenamiento jurídico, e implica negarle el derecho a oponerse al maltrato y condenar a otras mujeres a soportarlo, con tal de no perder beneficios jurídicos como el de la pensión de sobrevivientes.

Es bajo ese entendido que se corrobora que la pareja compartió techo, lecho y mesa por más de 5 años con una sujeción familiar y vocación de permanencia, con lo que es posible pregonar una convivencia real y efectiva en el lapso que la ley y la jurisprudencia exigen y que permite a la demandante acceder a la prestación económica buscada.

En lo que atañe al monto de la pensión, como Colpensiones ya efectuó un reconocimiento a los hijos que ostentaban las condiciones que los hace beneficiarios de la prestación en coherencia con lo normado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, es claro que la mesada pensional corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente, el cual ha estado distribuido entre los hijos Leonardo Fabio Arenas Pedrozo y Anderley Arenas Mosquera, siendo acertado lo concluido por la *a quo* en cuanto a que el derecho de la demandante se asigna desde la fecha de la muerte en un 50% en su condición de cónyuge separada de hecho, y la restante proporción estará en cabeza de los hijos mientras subsistan las causas que dieron origen a la prestación. Así, el retroactivo pensional de la reclamante debe ser calculado desde el 18 de diciembre de 2016 - *momento de su causación*-, sin intervención del fenómeno prescriptivo de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS por no dejarse transcurrir el término trienal que tales disposiciones regulan, concepto que asciende a \$35.298.956 a febrero de 2024 conforme a lo establecido en el artículo 283 del CGP¹, como se detalla a continuación, suma de la que se autorizan los descuentos con destino al Sistema de Salud.

AÑO	VR. MESADA	DESCUENTO % HIJO	TOTAL DEMANDANTE	N° MES	TOTAL
2016	\$ 344.728	\$ 57.432	\$ 287.296	0,43	\$ 123.537
2017	\$ 368.859	\$ 61.452	\$ 307.407	13	\$ 3.996.287
2018	\$ 390.621	\$ 65.077	\$ 325.544	13	\$ 4.232.066
2019	\$ 414.058	\$ 68.982	\$ 345.076	13	\$ 4.485.987
2020	\$ 438.902	\$ 73.121	\$ 365.781	13	\$ 4.755.147
2021	\$ 454.263	\$ 75.680	\$ 378.583	13	\$ 4.921.576
2022	\$ 500.000	\$ 83.300	\$ 416.700	13	\$ 5.417.100
2023	\$ 580.000	\$ 96.628	\$ 483.372	5	\$ 2.416.860
2023	\$ 580.000	\$ 96.628	\$ 483.372	8	\$ 3.866.976
2024	\$ 650.000	\$ 108.290	\$ 541.710	2	\$ 1.083.420
				TOTAL	\$ 35.298.956

Se precisa que, la Juez ordenó la compensación sobre las mesadas futuras de los otros beneficiarios de la prestación para cubrir este retroactivo; no obstante, lo que revela la documental con la que se cuenta, y específicamente, los actos administrativos de reconocimiento, es que tanto

¹ Actualización de la condena.

Leonardo Fabio Arenas Pedrozo como Anderley Arenas Mosquera han recibido desde el disfrute de la pensión la proporción del 33.33%, y aun cuando debió entregarse el 25% a cada uno, lo cierto es que el 25% que correspondía a Leonardo Fabio Arenas era reclamado por Justina Pedrozo en su calidad de guardadora o curadora de su hijo interdicto (Págs. 104-105 Archivo 01), lo que quiere decir que por la parte de la mesada que no le fue dada pero si disfrutada por su hijo y administrada por ella, que corresponde al 8.33%, debe darse aplicación a la teoría del “*efecto liberatorio*” que en voces de la H. Corte Suprema de Justicia habilita la posibilidad de que, aun cuando el derecho se causa al momento de la fecha de fallecimiento, el pago de la misma, se inicie en fecha diferente, lo que se da en eventos como cuando las mesadas efectivamente canceladas por la respectiva administradora lo fueron a favor de un miembro del mismo grupo familiar de quien demanda, por tener la posibilidad de beneficiarse de tales pagos, en virtud de actuar como representante legal del menor a quien le fue reconocida la prestación (Ver SL540-2021, 1019-2021, SL5316-2021).

Así, como en este caso patente es que Justina Pedrozo recibió y efectuó el cobro del 33.33% de forma mensual sobre la asignación pensional en cabeza de Leonardo Fabio, el efecto liberatorio definido por la Alta Corporación da paso a que Colpensiones de reconocimiento a la prestación desde el momento del óbito en un 41.67% de la mesada, liberando el porcentaje que recibió en nombre de su hijo, por manera que la compensación futura se surte solo respecto de Anderley Arenas Mosquera respecto del 8.33% de su mesada, con lo que no se afecta el devengo pensional ni los intereses de la demandada, postura que explica el resultado final del retroactivo condenado, aclarando que la administradora deberá continuar cancelando a Justina Pedrozo Payares a partir del 01 de marzo de 2024 una mesada equivalente a \$650.000, sin perjuicio de la mesada adicional de diciembre y los incrementos anuales de ley.

Sobre esa suma habrá de ordenarse la indexación, que no es una condena en sí misma considerada, sino que con ella se surte la corrección monetaria a fin de solucionar el detrimento económico cuando no se pagan oportunamente las prestaciones del Sistema sin miramientos de la buena o mala fe de las partes. Indexación que deberá ser calculada hasta el

momento del pago efectivo de la obligación que aquí se impone frente a cada mesada.

Los intereses moratorios no son procedentes, toda vez que para determinar la procedencia de dicho gravamen, dada su naturaleza resarcitoria, debe analizarse la conducta de la entidad convocada en el retardo o negación del reconocimiento o pago de la pensión, ya que, en el evento de demostrarse que su proceder tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación, su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin el alcance que puedan darle los jueces, sin intervención de situación que le son imposibles de predecir, o cuando el reconocimiento de la pensión obedece a la creación de criterio jurisprudencial, debe exonerársele de los intereses de mora (SL704 de 2013, SL7893-2015 y SL2786 de 2020).

Bajo las anteriores previsiones, aun cuando Colpensiones dio negativa al derecho sin dársele razón en este escenario judicial, lo cierto es que la pensión de sobrevivientes que se concede proviene de distintas intelecciones jurisprudenciales que no son vinculantes para la administradora demandada y en este sentido, no resulta razonable imponer la condena de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, punto en el que habrá de ser confirmada la sentencia.

En lo que atañe a las costas procesales impuestas, debe señalarse que tal rubro es procedente en la forma ordenada, en tanto se trata de una imposición bajo criterios objetivos a cargo de quien fue vencido en juicio conforme lo pregonan el numeral 1° del artículo 365 del CGP, ya que tales rubros no supeditan su reconocimiento a una actuación subjetiva, sino exclusivamente a los resultados del proceso, siendo una consecuencia procesal del ejercicio de acción, y claramente frente a la activa a Colpensiones le fue resuelta la litis desfavorablemente (Ver SL947-2021 y AL471-2018). Y es que la finalidad de las costas procesales es cubrir las erogaciones económicas que comportan la atención de un proceso judicial, por lo que los gastos de las convocadas dentro de este trámite deben ser asumidos por el extremo activo.

Conforme a lo que pregona el artículo 365-3 del CGP, las costas en esta instancia son a cargo de la parte demandada, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$1.300.000.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **MODIFICA** la sentencia venida en apelación y consulta de fecha y procedencia conocidas, en cuanto al valor retroactivo pensional calculado hasta mayo de 2023 y se actualiza a febrero de 2024 en \$35.298.956, debiendo continuar Colpensiones reconociendo una mesada pensional de \$650.000 a partir del 01 de marzo de 2024. También en lo que respecta a la compensación, autorizando a Colpensiones descontar de las mesadas futuras de Anderley Arenas Mosquera el equivalente al 8.33% mensual que correspondía a Justina Pedrozo en los términos expresados en la parte motiva. **CONFIRMA** en lo demás la decisión. Las costas son como quedó dicho en la parte motiva.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

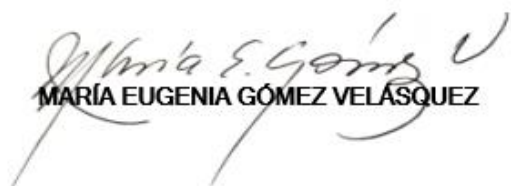
Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310500720190048001
Proceso:	ORDINARIO LABORAL
Demandante:	JUSTINA PEDROZO PAYARES
Demandado:	COLPENSIONES
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	28/02/2024
Decisión:	CONFIRMA y MODIFICA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 29/02/2024 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

Secretario